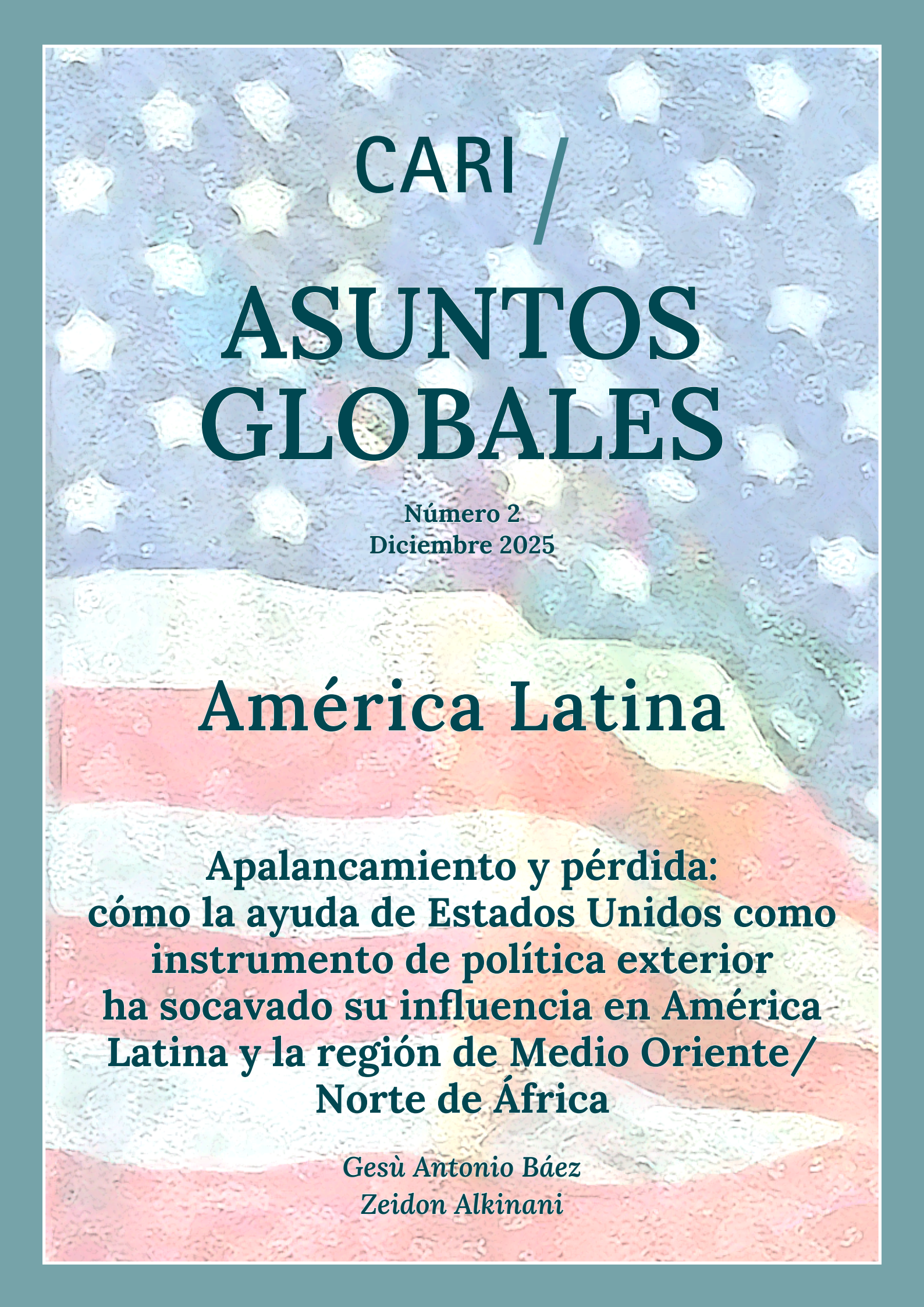




# CARI / ASUNTOS GLOBALES

Número 2  
Diciembre 2025

## América Latina

**Apalancamiento y pérdida:  
cómo la ayuda de Estados Unidos como  
instrumento de política exterior  
ha socavado su influencia en América  
Latina y la región de Medio Oriente/  
Norte de África**

*Gesù Antonio Báez  
Zeidon Alkinani*



# Apalancamiento y pérdida: cómo la ayuda de Estados Unidos como instrumento de política exterior ha socavado su influencia en América Latina y la región de Medio Oriente/Norte de África



**Gesù Antonio Báez**

Director fundador y asesor político principal de Pax Tecum Global Consultancy, con sede en Londres. Posee títulos de posgrado en Política Internacional (SOAS, Universidad de Londres), Defensa de los Derechos Humanos (Universidad de York) y Lenguas Modernas y Asuntos Internacionales (Universidad del Sur de Florida). Ha asesorado a Gobiernos, organizaciones multilaterales y coaliciones de la sociedad civil en procesos de transición y comunicación estratégica. Sus artículos han sido publicados en *TRT World*, *Open Democracy* y en destacadas plataformas de análisis político regional. Correo de contacto: [gbaez@paxtecumglobal.org](mailto:gbaez@paxtecumglobal.org)



**Zeidon Alkinani**

Profesor adjunto en la Universidad de Georgetown (Catar) y director de Programas en la Oficina del Director Ejecutivo de la Qatar Foundation. Es doctor en Política y Relaciones Internacionales por la Universidad de Aberdeen. Su especialización se centra en la política identitaria y la geopolítica de Oriente Medio y el Norte de África después de 2003, con especial atención en Irak. Correo de contacto: [zaa47@georgetown.edu](mailto:zaa47@georgetown.edu)

## 1. Introducción

**D**urante la reunión de líderes del Caribe y Estados Unidos, celebrada en Nassau el 8 de junio de 2023, la vicepresidenta Kamala Harris, acompañada por el primer ministro bahameño, Philip Davis, anunció un nuevo paquete de asistencia estadounidense por 100 millones de dólares destinado a la

región del Caribe. La iniciativa se centró en ayuda humanitaria para Haití, resiliencia climática y control del tráfico de armas de fuego. De ese monto, 53,7 millones de dólares fueron asignados a la crisis alimentaria y sanitaria que atraviesa Haití, una situación que se ha agravado desde el asesinato, en 2021, del presidente Jovenel Moïse en manos de mercenarios extranjeros, hecho que profundizó la inestabilidad del país (O’Boyle y Morland, 2023). Si bien la visita representó el compromiso de más alto nivel de un funcionario estadounidense con la región hasta la fecha, los líderes de la sociedad civil haitiana recibieron el anuncio con gratitud moderada y un creciente escepticismo (Coto y Sanon, 2025).

Sin embargo, el escepticismo no es exclusivo de Haití. Dos décadas después del lanzamiento del Plan Colombia —en su momento aclamado como un modelo de referencia para la asistencia estadounidense en materia de seguridad y desarrollo—, los propios funcionarios colombianos reconocen abiertamente sus limitaciones. El cultivo de coca ha resurgido, la justicia transicional se ha estancado y los antiguos territorios controlados por las FARC permanecen marginados. Por su parte, en la República Dominicana, las recientes iniciativas de la USAID han sido objeto de críticas por priorizar las preocupaciones de Washington en materia migratoria por encima de la desigualdad estructural, lo que refuerza la percepción de que la ayuda estadounidense actúa de forma coercitiva y en beneficio propio.

Estos episodios reflejan una revisión más profunda en toda América Latina, donde la ayuda exterior de Estados Unidos ya no se percibe como un símbolo de asociación, sino como un instrumento de condicionalidad, desatención y sobre-reacción estratégica. Sin embargo, América Latina no está sola. En Medio Oriente y el Norte de África (MENA, por sus siglas en inglés) se observan patrones similares: en Egipto y Jordania, la ayuda estadounidense se utiliza con frecuencia como medio de presión para asegurar la adhesión política, especialmente en lo relativo a Gaza; en Irak, la ambigüedad de los compromisos en materia de seguridad ha erosionado la credibilidad de Washington, a medida que se expande la influencia iraní. Por su parte, los Estados del Golfo —antes considerados clientes de seguridad confiables— se han mostrado cada vez más desilusionados ante la incapacidad de Estados Unidos para disuadir amenazas durante la crisis de los petroleros de 2019 y la disputa intra-CCG de 2017, lo que ha impulsado nuevas estrategias de contención y diversificación de alianzas.

En conjunto, estos estudios de caso regionales evidencian un cambio profundo: el hecho de que el uso de la ayuda exterior por parte de Estados Unidos como instrumento de apalancamiento geopolítico ha socavado con frecuencia la misma influencia que buscaba preservar. Aunque concebida para consolidar posiciones estratégicas, la asistencia condicionada por intereses de seguridad, objetivos de corto plazo o prácticas de diplomacia coercitiva ha generado desconfianza, debilitado alianzas y acelerado realineamientos que se alejan de Washington. El presente artículo analiza la evolución del papel de la ayuda exterior estadounidense a través del prisma del realismo neoclásico y de la diplomacia económica, recurriendo a estudios de caso en América Latina y MENA, para examinar la creciente disonancia entre la intención estratégica y el impacto a largo plazo. En última instancia, propone la necesidad de un modelo recalibrado, uno que trascienda los paradigmas transaccionales y se base

en la rendición de cuentas mutua, el desarrollo sostenible y la reconstrucción de la credibilidad en un mundo multipolar.

## 2. Marco teórico

El presente artículo se desarrolla dentro del marco analítico del realismo neoclásico y la diplomacia económica (*economic statecraft*). El realismo neoclásico (Rose, 1998) explica los cambios en la política de ayuda exterior de Estados Unidos incorporando tanto las dinámicas sistémicas de poder como los factores de nivel interno, tales como la ideología de los liderazgos, la reestructuración burocrática (por ejemplo, el desmantelamiento de la USAID) y las preferencias de las élites (como el énfasis de Trump en una diplomacia basada en el retorno de la inversión). Paralelamente, la diplomacia económica (Baldwin, 1985) analiza cómo los instrumentos económicos —como la ayuda exterior o los incentivos a la inversión— se utilizan para influir en el comportamiento de otros Estados. La administración Trump redefinió la ayuda no como una herramienta de altruismo o de construcción normativa del Estado, sino como un mecanismo transaccional que vincula la asistencia directamente con los intereses materiales y la capacidad de apalancamiento de Estados Unidos, particularmente en contextos como Ucrania, Irán y el Golfo.

Para profundizar este marco, el artículo recurre también al concepto de “interdependencia armada” (*weaponized interdependence*) desarrollado por Farrell y Newman (2019), que subraya cómo los Estados que controlan redes económicas e informacionales críticas pueden explotar estratégicamente dichos vínculos para influir sobre otros actores. Tanto en América Latina como en la región de MENA, Estados Unidos ha tratado cada vez más la ayuda exterior como un nodo de control, condicionando el acceso a recursos de acuerdo con su política migratoria, sus prioridades estratégicas o sus objetivos de estabilización regional, como se observará en los estudios de caso posteriores. Al utilizar la asistencia para el desarrollo como un mecanismo de filtrado y control, Washington ha transformado la interdependencia en un instrumento de apalancamiento y ha amplificado las asimetrías en lugar de fomentar la reciprocidad.

A partir de este marco, la obra de Drezner (2015) sobre la coerción económica y la diplomacia del poder subraya cómo instrumentos como la ayuda exterior, cuando se aplican con un enfoque transaccional, dejan de funcionar como herramientas de diplomacia para convertirse en mecanismos de disciplina. Su análisis sugiere que dichos instrumentos solo conservan su eficacia cuando están respaldados por objetivos claros, mecanismos creíbles de aplicación y una coherencia estratégica, todos ellos aspectos implementados de forma desigual en la política estadounidense hacia América Latina (Drezner, 2003). Los estudios de caso de Colombia y la República Dominicana ilustran cómo la incoherencia y la politización debilitan la influencia a largo plazo y profundizan el escepticismo regional.

Estos enfoques teóricos refuerzan la aplicación más amplia del realismo neoclásico en el presente artículo, al mostrar que la ayuda exterior no constituye simplemente una extensión del poder sistémico, sino que se ve mediada por las preferencias de las élites, las presiones políticas internas y las lógicas institucionales cambiantes,

como la redefinición de la ayuda como inversión durante la administración Trump. Cuando se analiza a través del prisma triádico del realismo neoclásico, la diplomacia económica y la interdependencia armada, la política de ayuda estadounidense se revela no como un bien neutral, sino como una herramienta estratégica de efectos desiguales, especialmente cuando se utiliza para condicionar comportamientos en lugar de construir asociaciones genuinas.

### 3. Argumento

El argumento central de este artículo, en lo que respecta a la región de MENA, sostiene que, durante el segundo mandato de Trump, la ayuda exterior de Estados Unidos se apartó de un modelo multilateral centrado en el desarrollo para transformarse en una estrategia de política exterior de carácter transaccional y orientada a la inversión. Este cambio se reflejó tanto en el plano simbólico como en el institucional, en particular, con el desmantelamiento de la USAID y su sustitución por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), de carácter privatizado. El modelo de Trump redefinió la ayuda como una forma de inversión estratégica más que como asistencia humanitaria, exigiendo retornos tangibles, como el acceso a recursos naturales (por ejemplo, en Ucrania) o la obtención de contratos económicos (como en la propuesta nuclear con Irán). Incluso la tradicional asistencia en materia de seguridad dirigida a Egipto y Jordania fue sometida a una reevaluación creciente en función de criterios de eficiencia económica y lealtad geopolítica, antes que de democratización o reforma de la gobernanza. En el Golfo, la credibilidad de Estados Unidos se debilitó debido a compromisos de defensa inconsistentes, lo que llevó a la administración Trump a intentar restablecer su influencia mediante acuerdos de inversión de gran escala durante sus visitas de 2025, utilizando los flujos de capital como sustitutos de las garantías militares o diplomáticas.

En lo que respecta a América Latina, el argumento examina cómo la ayuda exterior de Estados Unidos ha oscilado históricamente entre la retórica del desarrollo y la coerción estratégica, lo que refleja un patrón más amplio, en el que la asistencia se utiliza menos como instrumento de asociación equitativa y más como un mecanismo de apalancamiento geopolítico. Si bien la región ha sido presentada con frecuencia como un laboratorio para la construcción de instituciones democráticas y la liberalización económica —en particular, a través de programas como la Alianza para el Progreso o el Plan Colombia—, la ayuda ha estado rutinariamente condicionada a la alineación ideológica, el control migratorio y la cooperación en materia de seguridad. En países como la República Dominicana, la asistencia destinada a fortalecer la sociedad civil y a apoyar a las comunidades marginadas se ha vinculado simultáneamente con políticas migratorias controvertidas y prioridades políticas internas de Estados Unidos, lo que ha generado resistencias y percepciones de imposición cultural. En Haití, la modalidad vertical de la ayuda —especialmente tras el terremoto de 2010— eludió las instituciones nacionales en favor de contratistas estadounidenses, lo que debilitó la capacidad local y fomentó una dependencia prolongada. Colombia, aliada tradicional de Washington, ilustra cómo la asistencia ha priorizado de manera abrumadora los objetivos militarizados en detrimento de una paz sostenible y una gobernanza inclusiva. En conjunto, estos casos evidencian que

la ayuda exterior estadounidense ha reflejado con frecuencia una disonancia entre los valores declarados y las prácticas operativas. Más que promover soberanía o resiliencia, ha tendido a consolidar relaciones asimétricas moldeadas por la condicionalidad, la visibilidad y el cálculo estratégico estadounidense, y ha erosionado, en última instancia, el poder blando y la credibilidad de Washington en una región que históricamente consideró su esfera natural de influencia.

#### **4. Comprender la ayuda exterior de Estados Unidos: ¿instrumento político o método estratégico?**

La ayuda exterior de Estados Unidos puede entenderse como un instrumento estratégico de política pública guiado por objetivos de seguridad nacional, económicos y humanitarios. En 2015, Estados Unidos destinó aproximadamente 48,57 mil millones de dólares —equivalentes a alrededor del 1,3 % del presupuesto federal— a la asistencia exterior, canalizada principalmente a través de programas bilaterales de desarrollo, asistencia en materia de seguridad y ayuda humanitaria. Entre los principales beneficiarios figuraban Afganistán, Irak, Jordania y Egipto; África y el Oriente Próximo fueron las regiones que recibieron las mayores proporciones. Diversas agencias, como la USAID y el Departamento de Estado, administran estos fondos bajo una estricta supervisión del Congreso. El informe subraya que las asignaciones de ayuda reflejan tanto los intereses estratégicos de largo plazo como respuestas a crisis globales derivadas de conflictos o enfermedades (Lawson y Tarnoff, 2016).

La ayuda exterior estadounidense resulta, probablemente, más eficaz cuando se alinea tanto con los objetivos de política exterior de Estados Unidos como con las necesidades de los países receptores. En términos más precisos, su éxito depende de la manera en que se implementa —determinada por las capacidades institucionales y los actores involucrados—, lo que exige un enfoque más estratégico y relacional para afrontar los desafíos globales emergentes (Lancaster, 2005).

En su artículo de 2011 “U.S. military aid and recipient state cooperation” (La ayuda militar de Estados Unidos y la cooperación de los Estados receptores), Patricia L. Sullivan, Brock F. Tessman y Xiaojun Li analizan si la ayuda militar estadounidense conduce a que los Estados receptores se alineen más estrechamente con las preferencias de política exterior de Washington. Utilizando datos correspondientes al período 1981-2004, y tomando las votaciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas como indicador de cooperación, los autores concluyen que la ayuda militar, por sí sola, no incrementa de manera confiable el alineamiento y puede incluso reducirlo cuando se otorga de forma incondicional. El estudio sostiene que la ayuda resulta más eficaz cuando es condicional y se vincula a expectativas de desempeño claramente definidas. Basándose en la teoría del agente-principal, los autores sugieren que los Estados receptores suelen percibir la ayuda como un derecho adquirido o una necesidad estratégica, lo que limita la capacidad de influencia de Estados Unidos. En consecuencia, para que la ayuda militar contribuya efectivamente a reforzar la cooperación, debe emplearse de manera estratégica, acompañada de incentivos claros y posibles costos ante el incumplimiento (Sullivan, Tessman y Li, 2011).



En su artículo de 1998, Steven W. Hook analiza la eficacia limitada de la ayuda exterior estadounidense en la promoción de la democracia entre 1992 y 1996, y sostiene que las condicionalidades políticas —que exigían reformas democráticas a cambio de asistencia— se aplicaron de manera inconsistente y, con frecuencia, fueron subordinadas a intereses estratégicos. Si bien los responsables de la formulación de políticas en Estados Unidos enfatizaban públicamente la promoción de la democracia, la ayuda se mantuvo incluso cuando los Gobiernos receptores no cumplían con los criterios políticos establecidos, especialmente cuando representaban un valor geopolítico o económico relevante para Washington. Hook concluye que dichas condicionalidades tuvieron un efecto limitado en la promoción de reformas, particularmente en los regímenes autoritarios capaces de resistir la presión o en contextos donde los intereses estadounidenses desalentaban su aplicación. El autor identifica una tensión fundamental entre los objetivos normativos y las consideraciones realistas, y concluye que la ayuda exterior, sin una aplicación coherente ni un apoyo interno sostenido a los procesos de democratización, constituye una herramienta débil para fomentar un cambio democrático duradero.

## **5. Desmantelamiento de la USAID durante la segunda administración Trump**

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) fue desmantelada abruptamente en febrero de 2025 durante la segunda administración Trump, tras una orden ejecutiva emitida por el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk. Las operaciones de la agencia fueron suspendidas, su presencia digital eliminada y más de 10.000 empleados y contratistas fueron despedidos sin supervisión del Congreso, lo que generó serias preocupaciones legales y constitucionales. Los autores subrayan el papel fundamental de la USAID en MENA, donde solo en 2024 proporcionó más de 4,2 mil millones de dólares en asistencia, incluidos 2 mil millones de dólares ayuda humanitaria destinados a zonas de conflicto como Gaza, Siria y Yemen, además de una importante asistencia para el desarrollo en países como Egipto y Jordania. Sostienen que el colapso de la agencia socava gravemente los intereses estratégicos, la credibilidad y la influencia a largo plazo de Estados Unidos en la región; advierten que el vacío resultante podría ser ocupado por potencias rivales y hacen un llamado a renovar el compromiso estadounidense con la cooperación para el desarrollo en el exterior (Beschel Jr., Dyer y Yousef, 2025).

La USAID ha representado una influencia significativa en Oriente Medio, especialmente por sus aportes en materia de salud, educación y desarrollo económico a lo largo de los últimos 45 años. La agencia ha invertido decenas de miles de millones de dólares en la región, y ha contribuido de manera notable a la reducción de las tasas de mortalidad infantil y al impulso de proyectos de infraestructura. La reciente decisión de la administración Trump de suspender las operaciones de la USAID ha provocado la paralización de numerosos proyectos, lo que afectó negativamente a millones de personas que dependen de su asistencia. Esta medida ha suscitado preocupación sobre el futuro de los esfuerzos de desarrollo y de ayuda humanitaria en

Oriente Medio y ha subrayado el papel esencial de la agencia en la estabilidad y el progreso regionales (AlTaher, 2025).

Parece que la política exterior de Estados Unidos bajo la segunda administración Trump se ha orientado más hacia formas de cooperación que generen un retorno de la inversión para el propio país, en lugar de promover inversiones estadounidenses en organizaciones destinadas a respaldar y proveer asistencia a economías frágiles en todo el mundo. Esta tendencia se ha manifestado con particular claridad a través del denominado “factor económico” durante las negociaciones de Trump con Ucrania. Uno de los desarrollos más relevantes fue la creación, en abril de 2025, del Fondo de Inversión para la Reconstrucción de Ucrania, mediante el cual Estados Unidos obtuvo el 50 % de las regalías y tarifas procedentes de los proyectos de recursos naturales de Ucrania. Los ingresos resultantes se destinarán a nuevas inversiones en el país, mientras que Trump vinculó la continuidad del apoyo estadounidense al acceso a materiales estratégicos —en particular, tierras raras— como forma de compensación por la ayuda prestada en el pasado. Incluso la política exterior estadounidense hacia Irán mostró, de manera inesperada, una mayor disposición a entablar conversaciones con Teherán bajo la condición de la no proliferación nuclear. Este giro coincidió con rumores extraoficiales que apuntaban a que Irán estaba dispuesto a invertir en la economía estadounidense. En abril de 2025, funcionarios de ambos países mantuvieron conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní, durante las cuales Teherán propuso la construcción de 19 reactores y ofreció contratos que podrían impulsar la industria nuclear estadounidense si se levantaban las sanciones y avanzaban las negociaciones (O’Connor, 2025).

### 5.1. Irak

Las operaciones de la USAID en Irak han sido objeto de críticas por la falta de coherencia en su monitoreo y por la politización en la entrega de la ayuda (Office of Inspector General, 2025). Diversos informes de supervisión —entre ellos, los del inspector general especial para la reconstrucción de Irak (SIGIR, por sus siglas en inglés)— han documentado casos de gestión deficiente, falta de rendición de cuentas y proyectos inconclusos o insostenibles como resultado de una supervisión insuficiente y de una coordinación local limitada. Estos problemas han socavado la eficacia a largo plazo de la asistencia y han generado preocupación respecto del uso responsable de los fondos públicos estadounidenses. Además, en ciertos momentos la ayuda estadounidense se ha utilizado como herramienta política para ejercer presión sobre el Gobierno iraquí, mediante la amenaza o el retraso de fondos y de asistencia en materia de seguridad en respuesta a decisiones adoptadas por Bagdad, en particular, cuando el liderazgo iraquí cuestionó la presencia militar estadounidense o se alineó más estrechamente con Irán. Esta condicionalidad estratégica ha debilitado la percepción de neutralidad de la USAID y ha alimentado el escepticismo de la opinión pública iraquí, lo que dificultado los esfuerzos de la agencia por promover la estabilidad y el desarrollo en el país.



## 5.2. Egipto

La provisión de ayuda militar de Estados Unidos a Egipto sigue siendo un asunto particularmente complejo, especialmente el paquete anual de aproximadamente 1,3 mil millones de dólares, que sustenta intereses estratégicos como la paz con Israel y la cooperación antiterrorista. Sin embargo, persisten las dudas sobre si esta asistencia proporciona realmente capacidad de influencia o, por el contrario, consolida la gobernanza autoritaria, lo que ha llevado a plantear la necesidad de revaluar su papel en el contexto de transformaciones regionales como la Primavera Árabe (Axelrod, 2011). Históricamente, la ayuda exterior estadounidense ha funcionado como un instrumento estratégico de influencia en Oriente Medio —en especial en Egipto—, donde ha estado estrechamente vinculada al mantenimiento de la paz y la estabilidad regional. Tras los Acuerdos de Camp David y el tratado de paz de 1979 entre Egipto e Israel, Estados Unidos comenzó a proporcionar una asistencia anual considerable —especialmente en el ámbito militar—, como parte de un esfuerzo más amplio para anclar a Egipto en la órbita occidental y preservar la paz árabe-israelí (Sharp, 2023). Si bien sucesivas administraciones estadounidenses han expresado en ocasiones preocupación por la gobernanza autoritaria, las violaciones de derechos humanos y los excesos del poder militar —en particular tras el golpe de Estado de 2013, que llevó al poder a Abdel Fattah el-Sisi—, la ayuda rara vez ha sido suspendida de manera significativa (Brownlee, 2012). El valor estratégico de Egipto —incluido el control del canal de Suez, su papel en los esfuerzos antiterroristas y su capacidad para influir en la política regional— ha superado de manera constante las consideraciones normativas, lo que redujo la eficacia de la ayuda como herramienta de influencia condicionada (Adly, 2015). Esta dinámica plantea interrogantes importantes sobre cómo la asistencia estadounidense a Egipto puede, de hecho, obstaculizar los esfuerzos hacia una reforma sostenible a largo plazo. El presidente Abdel Fattah el-Sisi es ampliamente considerado como el principal aliado regional de Washington, un socio confiable para mantener la estabilidad, facilitar la cooperación antiterrorista y salvaguardar intereses estratégicos, como el control del canal de Suez y la influencia regional. Sin embargo, esta relación ha tendido a eclipsar los objetivos originales de la asistencia estadounidense.

En teoría, la ayuda exterior debería promover los derechos humanos, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento institucional. En el caso de Egipto, sin embargo, estos objetivos han sido sistemáticamente relegados. La asistencia ha continuado a pesar de la represión generalizada de la sociedad civil, la supresión de la oposición política y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos bajo el Gobierno de Sisi. Más que incentivar reformas, la importancia estratégica de Egipto para la política exterior estadounidense ha permitido al régimen recibir cuantiosa ayuda militar y económica con una rendición de cuentas limitada. Esta dinámica ha debilitado la credibilidad y la eficacia de la ayuda como instrumento para fomentar una gobernanza democrática genuina y un progreso socioeconómico sostenible. En consecuencia, la asistencia de Estados Unidos a Egipto ha funcionado menos como

un mecanismo de influencia y más como un subsidio *de facto* destinado a mantener la cooperación estratégica existente.

### 5.3. Jordania

A diferencia de otros casos, la ayuda estadounidense a Jordania ha funcionado más como un mecanismo de estabilización y reforma económica que como un instrumento de presión política directa, aunque sigue siendo un componente esencial de la política regional de Washington. Pese a su orientación más económica y centrada en la estabilidad, resulta importante evaluar si estos esfuerzos se han traducido en un cambio sostenible y medible. A lo largo de los años, Estados Unidos ha proporcionado a Jordania una asistencia económica sustancial destinada a apoyar reformas estructurales, promover el crecimiento del sector privado y fortalecer la estabilidad fiscal. Sin embargo, si bien esta ayuda ha permitido al país amortiguar los impactos de crisis externas —como la guerra en Siria, la inestabilidad regional y el aumento de los costos energéticos—, sigue siendo objeto de debate si las reformas económicas han generado un crecimiento duradero y autosostenido. El elevado desempleo —especialmente entre los jóvenes—, los persistentes niveles de endeudamiento y la dependencia de la ayuda externa sugieren que los resultados han sido limitados o desiguales. Evaluar la eficacia de los programas de reforma económica respaldados por Estados Unidos exige, por tanto, un examen más detenido de indicadores concretos, como la creación de empleo, la mejora del clima de inversión y la reducción de los déficits fiscales a lo largo del tiempo.

Desde la década de 1950, Jordania ha recibido un apoyo constante de Washington, en virtud de su monarquía prooccidental, su política exterior moderada y su ubicación estratégica —fronteriza con Israel, Siria e Irak— (Ryan, 2018). La ayuda estadounidense —formalizada a través de memorandos de entendimiento plurianuales— ha sido fundamental para apuntalar la frágil economía jordana, especialmente durante periodos de crisis regional, como las guerras del Golfo, la llegada masiva de refugiados palestinos y sirios, y el auge del Estado Islámico (Sharp, 2023). Aunque menos militarizada que la asistencia a Egipto, la ayuda a Jordania ha estado en ocasiones vinculada a reformas económicas de corte neoliberal promovidas por instituciones financieras internacionales, lo que refleja cierto grado de influencia tecnocrática (Harrigan y El-Said, 2009). No obstante, Washington ha evitado utilizar la ayuda como medio de presión sobre Ammán en materia de liberalización política o reforma democrática, priorizando en cambio la estabilidad, la cooperación en inteligencia y la gestión de los flujos de refugiados. Esta postura refleja una estrategia estadounidense más amplia en la región, en la que la ayuda busca asegurar socios confiables más que imponer alineamientos ideológicos.

## 6. Reactivando las relaciones con el Consejo de Cooperación del Golfo: inversiones empresariales para la estabilidad geopolítica

La percepción del declive en la fiabilidad de Estados Unidos como garante de seguridad en el Golfo, especialmente tras las principales crisis regionales de 2017 y 2019, ha impulsado una recalibración estratégica entre los Estados miembros del

Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). La incapacidad de Washington para prevenir o responder eficazmente a los presuntos ataques iraníes contra la infraestructura petrolera saudí en 2019 —incluidos los ataques con drones y misiles a Abqaiq y Khurais— expuso las vulnerabilidades del paraguas de seguridad estadounidense y generó dudas sobre su compromiso con la defensa del Golfo (Fulton, 2020). Este episodio se sumó a la crisis intra-CCG iniciada en 2017, cuando Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto impusieron un bloqueo a Catar. A pesar de ser un socio histórico de todas las partes, Estados Unidos no logró mediar una resolución oportuna ni ejercer un liderazgo decisivo, lo que evidenció las limitaciones de su influencia regional (Ulrichsen, 2020). Según Zeidon Alkinani (2020), estos acontecimientos consolidaron, entre las élites del Golfo, la percepción de que Estados Unidos carece de la voluntad o la capacidad para desempeñar su papel tradicional como hegemon estabilizador. En consecuencia, los Estados del Golfo han comenzado a adoptar estrategias de diversificación y cobertura, reforzando sus vínculos con potencias no occidentales como China, Rusia e India, con el fin de diversificar sus relaciones internacionales y reducir su dependencia de Washington (Gause, 2017; Alkinani, 2020). Esta tendencia refleja un cambio más amplio en la geopolítica de Oriente Medio hacia un entorno multipolar, en el que los Estados de menor tamaño buscan mayor autonomía estratégica aprovechando su posición entre potencias globales competidoras.

Las visitas del presidente Trump en mayo de 2025 a Riad, Doha y Abu Dabi reflejan una política exterior impulsada por una diplomacia orientada a los negocios, en la que los acuerdos de inversión masiva funcionan como mecanismos de presión y negociación para alcanzar objetivos políticos más amplios. En Arabia Saudita, Trump obtuvo un compromiso de inversión por 600 mil millones de dólares, mientras se reunía con el presidente sirio Ahmed al-Sharaa y proponía el levantamiento de las sanciones estadounidenses, lo que evidenció un enfoque transaccional para restablecer los lazos regionales (Goodwin, 2025). En Catar, se firmaron acuerdos por más de 1,2 billones de dólares estadounidenses, incluido un importante contrato con Boeing, junto con conversaciones destinadas a reducir las tensiones con Irán, en las que Trump insinuó un posible deshielo de las relaciones a cambio de cooperación estratégica (Financial Times, 2025; O'Connor, 2025). Los Emiratos Árabes Unidos, por su parte, se comprometieron a invertir 1,4 billones de dólares estadounidenses en Estados Unidos, con lo que consolida este modelo de diplomacia basada en el capital. Estos acuerdos económicos también sirvieron de marco político para promover resultados de mayor alcance, como una mayor participación árabe en los Acuerdos de Abraham y el desarrollo de canales de diálogo indirectos sobre la estabilización posterior al conflicto en Gaza (Stepansky, 2025). La estrategia de Trump subraya así una política exterior en la que la inversión funciona simultáneamente como incentivo e instrumento para reconfigurar las alianzas en Oriente Medio.

## **7. Un vecino benevolente: la USAID y su divergencia en América Latina**

A diferencia de su trayectoria en Oriente Medio, la política exterior de Estados Unidos en América Latina ha seguido históricamente una senda distinta, tanto en su formulación estratégica como en su implementación. En América Latina, dicha



política se configuró en gran medida bajo la influencia de la doctrina Monroe y de la lógica de contención de la Guerra Fría, con Washington procurando evitar la expansión del comunismo y mantener su dominio hemisférico (Grandin, 2006). La asistencia canalizada a través de la USAID se centró en la liberalización económica, la construcción de instituciones democráticas y las reformas de mercado, lo que con frecuencia reflejó una agenda de corte neoliberal que priorizaba la estabilidad macroeconómica por encima de las necesidades de desarrollo local (Babb, 2001; Crandall, 2008). Este enfoque generó escepticismo entre los actores de la sociedad civil, que percibieron la ayuda estadounidense como un instrumento de condicionalidad y de injerencia externa. Por el contrario, en Oriente Medio la ayuda de Estados Unidos ha sido más abiertamente militarizada y estratégica, impulsada por intereses vinculados a la seguridad energética, la lucha contra el terrorismo y la protección de aliados clave, como Israel y Egipto. Los paquetes de asistencia militar a gran escala —en particular, hacia Egipto, Israel y Jordania— han estado frecuentemente asociados a acuerdos de paz o marcos de cooperación en materia de seguridad regional, con menor énfasis en la reforma democrática (Sharp, 2020). La aparente incoherencia entre los valores proclamados por Estados Unidos y su apoyo a regímenes autoritarios ha suscitado amplias acusaciones de hipocresía en la región. Aunque ambas regiones comparten un historial de intervencionismo estadounidense, América Latina ha tendido a experimentar una ayuda al desarrollo más ideológicamente orientada, mientras que Oriente Medio se ha consolidado como un espacio de diplomacia transaccional definida por consideraciones de seguridad.

Durante la Guerra Fría, las iniciativas de la USAID estuvieron profundamente entrelazadas con el objetivo estratégico de contrarrestar la influencia soviética en el hemisferio occidental. Durante décadas, América Latina fue observada bajo la mirada del “patio trasero” de Estados Unidos en virtud de la doctrina Monroe, la cual otorgó a los presidentes estadounidenses una especie de derecho cuasidivino para aplicar políticas de corte casi imperialista en la región. No obstante, a través de la USAID, se buscó proyectar a Estados Unidos como un socio confiable y benefactor (Grandin, 2006). Programas como la Alianza para el Progreso pretendían promover el desarrollo económico y la estabilidad política, con el fin de disuadir la expansión del comunismo (Office of the Historian, 2025). Si bien estos esfuerzos generaron avances notables en ámbitos como la salud y la educación, muchos países latinoamericanos los percibieron más como mecanismos de estrategia geopolítica estadounidense que como auténticas asociaciones para el desarrollo.

Con el tiempo, las críticas a la ayuda exterior de Estados Unidos comenzaron a subrayar las incongruencias entre los valores proclamados y las acciones reales. Mientras defendía la democracia y los derechos humanos, en ocasiones Washington respaldó a regímenes autoritarios afines a sus intereses estratégicos, lo que alimentó percepciones de hipocresía. Esta disonancia debilitó la credibilidad de las iniciativas estadounidenses y fomentó el escepticismo entre las poblaciones latinoamericanas respecto de las verdaderas intenciones que subyacían a los programas de ayuda. Antes del desmantelamiento de la agencia y del retorno de la presidencia de Trump a comienzos de 2025, la USAID había ampliado su enfoque para incluir la promoción de la participación y la defensa de grupos marginados, lo que reflejó un giro hacia metas de desarrollo más inclusivas. En la República Dominicana, la gestión del em-

bajador estadounidense James “Wally” Brewster marcó un momento significativo dentro de esta evolución. El embajador Brewster se comprometió activamente con organizaciones de la sociedad civil local, respaldó iniciativas destinadas a incrementar la participación política de comunidades marginadas y trabajó para desafiar estigmas sociales arraigados. Pese a enfrentar una considerable reacción adversa, sus esfuerzos —respaldados por la USAID— contribuyeron a ampliar los derechos de los grupos históricamente excluidos y dejaron un impacto duradero y sustantivo en el país, tanto en el plano social como institucional, lo que consolidó un precedente importante en materia de inclusión y equidad.

## 7.1. Haití: intenciones dudosas

Un conocido dicho estadounidense sostiene que “el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”. En el caso de Haití y la intervención de la USAID, sin embargo, cabe preguntarse si las intenciones iniciales fueron realmente buenas o si el fracaso estaba predestinado desde su concepción. La respuesta de Estados Unidos al devastador terremoto de 2010 se ha convertido en uno de los ejemplos más citados de las consecuencias no deseadas de una ayuda al desarrollo securitizada y dirigida externamente. Aunque Washington prometió más de cuatro mil millones de dólares en asistencia, gran parte de esos fondos no logró impulsar una recuperación sostenible ni fortalecer las instituciones nacionales. Investigaciones del Center for Economic and Policy Research (CEPR) y de otros organismos revelaron que menos del 2 % de los recursos de reconstrucción llegó efectivamente a instituciones haitianas, mientras que la gran mayoría se desvió hacia contratistas estadounidenses, salarios de ONG internacionales y empresas privadas (Johnston y Main, 2012). Este modelo, impulsado por los donantes, fomentó un sistema vertical que marginó la experiencia local, fragmentó la prestación de servicios y consolidó la dependencia de la asistencia técnica extranjera, precisamente la dinámica que este artículo identifica como contraproducente para la influencia estratégica de Estados Unidos.

Un ejemplo en particular ilustrativo de este fracaso fue el Parque Industrial de Caracol, un proyecto ampliamente publicitado, pero finalmente abortado en 2012. Prometía decenas de miles de empleos, pero acabó desplazando comunidades locales en el norte de Haití, consumiendo recursos significativos y generando beneficios económicos limitados (Katz, 2013). Investigaciones del Worker Rights Consortium revelaron que los trabajadores textiles del parque recibían salarios aproximadamente un 34 % por debajo del mínimo legal. Esta represión salarial fue posible gracias a prácticas como la fijación de cuotas de producción inalcanzables y la infravaloración del trabajo extra. Tales violaciones ocurrieron pese a la importante inversión estadounidense en infraestructura, lo que sugiere una priorización sistémica de la rentabilidad empresarial sobre los derechos laborales (Worker Rights Consortium, 2013).

La implicación del Gobierno estadounidense en el proyecto Caracol fue más allá del apoyo financiero. La ubicación estratégica del parque, alejada del epicentro del terremoto, suscitó interrogantes sobre su coherencia con las necesidades más ur-

gentes de recuperación del país. La adquisición de tierras para el proyecto desplazó a cientos de pequeños agricultores, muchos de los cuales recibieron compensaciones insuficientes, lo que exacerbó la vulnerabilidad económica local. De manera similar, el compromiso de Washington de construir un gran puerto en el norte del país se desmoronó por una mala gestión logística y falta de coordinación con las autoridades haitianas. Estos fracasos no fueron meros errores técnicos: reflejaron un enfoque estructural de la ayuda exterior donde la visibilidad estratégica y los resultados inmediatos prevalecieron sobre la apropiación local y el desarrollo sistémico. Este enfoque ha deteriorado gravemente la confianza del pueblo haitiano en las intenciones estadounidenses y ha generado un escepticismo generalizado respecto de los motivos que subyacen a la asistencia humanitaria norteamericana (Katz, 2013).

De forma crucial, la política estadounidense hacia Haití refleja un patrón más amplio de securitización del desarrollo en América Latina, donde se priorizan la seguridad fronteriza, la disuasión migratoria y la estabilidad regional por encima de los resultados transformadores del desarrollo. Los programas de la USAID en Haití han tendido a reflejar las preocupaciones estratégicas de Washington más que las prioridades de sostenibilidad del país, con intervenciones en gobernanza y salud moldeadas por la lógica geopolítica estadounidense de los “Estados frágiles”, más que por las realidades estructurales locales. En este sentido, la USAID ha funcionado más como un instrumento de influencia geopolítica que como un mecanismo de cooperación equitativa, lo que ilustra la tesis central de este artículo: que la ayuda exterior estadounidense, cuando se ejerce de manera transaccional y sin un compromiso genuino con la soberanía y la sostenibilidad, debilita en lugar de fortalecer el poder blando de Estados Unidos en la región.

## 7.2. República Dominicana: entre la conformidad y la confrontación

Al observar a Haití y a su vecino más próspero y desarrollado, la República Dominicana, se evidencia un cambio en el enfoque, aunque las intenciones de fondo permanecen inalteradas. La relación de Estados Unidos con la República Dominicana ha estado históricamente determinada por intereses estratégicos, hegemonía regional y una asistencia al desarrollo condicionada por la alineación ideológica. La política exterior estadounidense hacia el país ha oscilado entre el intervencionismo directo y el patrocinio estratégico desde comienzos del siglo XX. Tras la ocupación militar estadounidense de 1916 a 1924, Washington ejerció una influencia sustancial sobre la política interna dominicana, especialmente durante la brutal dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), un régimen que Estados Unidos toleró durante décadas debido a su firme anticomunismo y a su alineamiento con las prioridades de la Guerra Fría, pese a su extrema crueldad y al culto a la personalidad que fomentó (Atkins y Wilson, 1998). Aunque Washington acabó retirando su apoyo en los últimos años del régimen, su complicidad en el sostenimiento de un orden autoritario reflejó una estrategia más amplia de priorizar la estabilidad regional y la conformidad ideológica por encima de la gobernanza democrática.

Tras el asesinato de Trujillo en 1961, la política exterior estadounidense continuó ejerciendo una influencia decisiva en los asuntos dominicanos. La intervención militar de 1965, lanzada bajo la presidencia de Lyndon Johnson, tuvo como objetivo suprimir una insurrección constitucionalista que Washington percibía como una posible revolución de orientación izquierdista. Este episodio consolidó a la República Dominicana como un punto nodal en los esfuerzos de Estados Unidos por contener el comunismo en el Caribe —solo superado por Cuba— y estableció un precedente de apoyo estadounidense a Gobiernos conservadores y neoliberales bajo el pretexto de la estabilización y el desarrollo (Lowenthal, 1991).

La USAID ha desempeñado un papel central en la estructuración de esta relación bilateral. Desde su establecimiento en el país, la agencia ha orientado sus programas hacia la reducción de la pobreza, el fortalecimiento institucional y, más recientemente, la gestión migratoria y el desarrollo de la sociedad civil. No obstante, la entrega de ayuda ha reflejado cada vez más los cambios geopolíticos globales y las prioridades políticas internas de Estados Unidos. En las dos décadas previas al desmantelamiento de la agencia, la financiación de la USAID estuvo regularmente condicionada a la disposición del país receptor para cooperar en materia de seguridad, control migratorio y cuestiones ideológicas como los derechos de género y de las minorías. Estas condicionalidades han complejizado la influencia de Washington en el país, generando fricciones con actores locales y exacerbando divisiones sociales.

Uno de los principales puntos de controversia ha sido la creciente implicación de la USAID en programas relacionados con la migración, en particular respecto a los inmigrantes haitianos y a las poblaciones apátridas de ascendencia haitiana residentes en la República Dominicana. Si bien oficialmente se presentaron como iniciativas de apoyo a la gobernanza fronteriza y la asistencia humanitaria, buena parte de esta ayuda coincidió con el endurecimiento de las políticas migratorias del Gobierno dominicano, incluidas deportaciones masivas y la negación del derecho de ciudadanía por nacimiento a personas de ascendencia haitiana, tras el controvertido fallo del Tribunal Constitucional de 2013 (Amnesty International, 2015). Organizaciones de la sociedad civil han criticado a la USAID por no impugnar adecuadamente estas violaciones ni respaldar respuestas basadas en los derechos humanos, al interpretar esta inacción como una aceptación tácita de prácticas estatales discriminatorias a cambio de la cooperación dominicana en cuestiones de seguridad de interés estadounidense (Robert F. Kennedy Human Rights, 2024).

Al mismo tiempo, los programas de la USAID orientados a la promoción de los derechos humanos y la salud reproductiva han generado reacciones adversas por parte de sectores conservadores de la sociedad dominicana, donde las instituciones evangélicas y católicas poseen una influencia cultural considerable. En 2025, se informó que fondos de la USAID estaban vinculados a programas de formación para periodistas locales sobre equidad de género y narrativas migratorias, iniciativas que, pese a su carácter progresista, suscitaron acusaciones públicas de injerencia ideológica extranjera y dieron lugar a campañas de acoso contra periodistas participantes (Pennacchio, 2025). Estas controversias ponen de relieve una paradoja central de la estrategia de asistencia estadounidense: mientras promueve valores como la inclusión y la equidad en el exterior, su ayuda es percibida localmente como intro-



misión o imposición cultural cuando no se basa en un auténtico sentido de apropiación local. De manera crítica, el papel de la USAID en la configuración de las narrativas del desarrollo ha reforzado un modelo tecnocrático de asistencia, que privilegia a las ONG y contratistas privados alineados con Estados Unidos por encima de las organizaciones locales. Este modelo socava la sostenibilidad de los resultados del desarrollo y limita la rendición de cuentas democrática en el diseño y la ejecución de los programas (Office of Inspector General, 2024).

El caso dominicano demuestra cómo la condicionalidad de la ayuda, fundada en prioridades políticas estadounidenses más que en objetivos de desarrollo cocreados, ha generado tanto cooperación instrumental como resentimiento profundo. Aunque la asistencia estadounidense ha sido indispensable en ámbitos como la respuesta ante desastres y la reforma técnica de la gobernanza, en ocasiones su condicionalidad ha socavado la soberanía local, ha contribuido a la polarización social y, en última instancia, ha restringido el poder blando de Washington. A medida que los actores regionales diversifican sus alianzas externas, la República Dominicana se mantiene como un emblema del modo en que una ayuda transaccional e ideológicamente rígida puede erosionar la credibilidad a largo plazo, incluso en Estados históricamente alineados con los intereses de Estados Unidos.

### 7.3. Colombia: fragilidad y vacíos de la ayuda

Colombia ha sido durante décadas uno de los principales receptores de asistencia exterior estadounidense en el hemisferio occidental, en gran medida debido a los esfuerzos por contener la llamada “guerra contra las drogas”, que se intensificó durante la década de 1980. Se implementó una amplia variedad de programas, aunque el más emblemático fue el Plan Colombia, lanzado en el año 2000 como una iniciativa bilateral destinada a frenar el narcotráfico, debilitar a los grupos insurgentes y estabilizar el Estado colombiano. Si bien el plan produjo resultados tangibles en materia de seguridad —entre ellos, el debilitamiento del movimiento guerrillero de las FARC y una reducción temporal en la producción de coca—, ha sido ampliamente criticado por su énfasis desproporcionado en la asistencia militar en detrimento de la inversión social. Cerca del 70 % de la ayuda estadounidense bajo el Plan Colombia se destinó a las fuerzas armadas y de policía, reforzando una presencia estatal militarizada en las regiones afectadas por el conflicto, mientras se desatendían las raíces socioeconómicas de la violencia y la desigualdad (Isacson, 2017). Este enfoque securitizado ha tenido repercusiones duraderas en los esfuerzos de construcción de paz. A pesar del histórico acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC, su implementación se ha visto rezagada en áreas clave, como la reforma agraria, la justicia transicional y la reintegración de excombatientes: sectores que requieren una inversión sostenida en gobernanza y sociedad civil, no solo en infraestructura de seguridad. Analistas sostienen que el legado militarizado de la ayuda estadounidense ha obstaculizado una transición plena hacia la paz, al reforzar un modelo de seguridad centrado en el Estado que no aborda los agravios locales ni las exclusiones históricas, especialmente en las zonas rurales (Rettberg, 2020).

La credibilidad del apoyo estadounidense se vio aún más cuestionada en 2025, cuando una suspensión temporal de los fondos de la USAID, presuntamente vinculada a disputas presupuestarias en Washington, interrumpió decenas de programas activos destinados a respaldar el proceso de paz colombiano. Entre ellos figuraban iniciativas para la gobernanza rural, la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el fortalecimiento de instituciones de justicia transicional, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta suspensión abrupta no solo desestabilizó las estructuras locales de implementación, sino que también envió una señal de debilitamiento del compromiso estadounidense con la estabilidad a largo plazo de su socio regional más leal. Tal como advierten diversos analistas, la imprevisibilidad de la ayuda exterior socava la misma influencia que Washington busca mantener, especialmente en un contexto en el que Colombia enfrenta retos internos complejos y una creciente vinculación con nuevos actores internacionales, como China y la Unión Europea (Crandall, 2020).

## 8. Recomendaciones y perspectivas futuras

Los estudios de caso de América Latina y de MENA revelan un patrón clave: cuando la ayuda exterior de Estados Unidos se utiliza como instrumento de presión estratégica en lugar de como base para una asociación sostenible, termina socavando la misma influencia que pretende proteger. Ya sea a través del desarrollo securitizado en Haití, las reacciones adversas a la condicionalidad en la República Dominicana o la diplomacia transaccional en Egipto y el Golfo, la asistencia estadounidense ha priorizado con demasiada frecuencia los beneficios políticos a corto plazo por encima del impacto a largo plazo. En un entorno global cada vez más multipolar, este enfoque resulta ya insostenible. Para restaurar la credibilidad, reconstruir la influencia y reorientar la ayuda exterior de acuerdo con imperativos tanto estratégicos como éticos, los responsables de la formulación de políticas en Estados Unidos deberían considerar las siguientes medidas:

### 8.1. Reinstitutionalizar la capacidad de desarrollo

Para evitar nuevos vacíos geopolíticos y un mayor deterioro reputacional, Estados Unidos debe restablecer una institución civil dedicada al desarrollo —ya sea mediante la revitalización de la USAID o la creación de una nueva agencia— dotada de supervisión congresional, presupuesto independiente y sólidos mecanismos de rendición de cuentas locales. El desmantelamiento abrupto de la USAID en 2025 dejó vacíos críticos en regiones como Oriente Medio, donde la ayuda a Gaza, Yemen y Siria se detuvo de manera repentina, y en América Latina, donde programas en curso en Colombia y Haití quedaron interrumpidos a mitad de ejecución. Estas disrupciones expusieron la fragilidad de las infraestructuras de ayuda excesivamente dependientes de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Un organismo reinstitucionalizado debe ser resiliente a los vaivenes políticos internos, capaz de cocrear políticas junto a los actores regionales, y estructuralmente empoderado para con-

cebir el desarrollo como un bien estratégico en sí mismo, no simplemente como un instrumento de influencia o apalancamiento político.

## 8.2. Modelo híbrido de ayuda e inversión

El futuro de la ayuda exterior estadounidense debe reconocer las diversas necesidades y trayectorias de desarrollo de los Estados socios. Un modelo híbrido debería integrar la asistencia al desarrollo con incentivos a la inversión, pero de forma calibrada y adaptada a las especificidades regionales. En los Estados frágiles, como Haití e Irak, la ayuda debe seguir siendo predominantemente humanitaria y orientada al fortalecimiento de la gobernanza, basada en un apoyo institucional a largo plazo. Por el contrario, los países con instituciones más estables —como Jordania o la República Dominicana— pueden beneficiarse de asociaciones respaldadas por inversiones, que fomenten el crecimiento del sector privado y el desarrollo de infraestructuras, manteniendo al mismo tiempo niveles mínimos de rendición de cuentas y transparencia. Los fracasos del Parque Industrial de Caracol en Haití y el rendimiento desigual de las reformas neoliberales apoyadas por Estados Unidos en Colombia ilustran los riesgos de aplicar una lógica de inversión en contextos carentes de capacidad estructural. Por ello, la política estadounidense debería evitar los enfoques uniformes y, en cambio, diseñar estrategias adaptativas que se alineen con las realidades políticas, sociales y económicas de cada Estado asociado.

## 8.3. Revisar los marcos de condicionalidad

La condicionalidad de la ayuda ha sido históricamente un arma de doble filo. Si bien puede generar la presión necesaria para impulsar reformas, su aplicación inconsistente ha tendido a alimentar la desconfianza y el resentimiento. En Egipto e Irak, la ayuda en materia de seguridad se ha mantenido a pesar de los avances mínimos en gobernanza y derechos humanos, lo que ha reducido la credibilidad de Estados Unidos. En la República Dominicana, las condicionalidades vinculadas a los derechos de género y las políticas migratorias provocaron reacciones adversas locales y acusaciones de imposición ideológica. Para que la condicionalidad de la ayuda sea efectiva, en el futuro deberá ser transparente, codiseñada con los actores locales y vinculada a indicadores realistas y medibles. Basándose en la teoría agente-principal (Sullivan, Tessman y Li, 2011), las condiciones deben acompañarse de incentivos basados en el desempeño y consecuencias claras por el incumplimiento, sin, por ello, socavar la soberanía nacional ni exportar las agendas políticas internas de Estados Unidos.

## 8.4. Equilibrar los objetivos estratégicos y normativos

Una de las críticas más recurrentes tanto en la región MENA como en América Latina es la percepción de hipocresía en la estrategia de ayuda estadounidense: se promueven la democracia y los derechos humanos en el discurso, mientras que, en la práctica, se financian regímenes autoritarios o excluyentes. Desde el apoyo sostenido de Washington al régimen de Sisi en Egipto hasta su tolerancia frente a

las expulsiones migratorias en la República Dominicana, la brecha entre los valores proclamados y las acciones concretas ha erosionado la confianza. La política de ayuda debe buscar un equilibrio más creíble entre los imperativos realistas —como la lucha contra el terrorismo, el control migratorio y el acceso a recursos naturales— y los compromisos normativos con las instituciones democráticas, la inclusión y la equidad. No hacerlo continuará alienando a las sociedades civiles, fortaleciendo a rivales como China y debilitando el poder blando estadounidense en regiones que antes se consideraban estratégicamente alineadas.

## **8.5. Adaptarse a las realidades multipolares**

En ambas regiones, los Estados están diversificando sus alianzas para reducir la dependencia de una política exterior estadounidense percibida como inconsistente. En el Golfo, los socios estratégicos se han acercado a China, Rusia e India para diversificar sus carteras de seguridad y cooperación económica. En América Latina, Colombia, la República Dominicana e incluso Haití están ampliando su cooperación con nuevos donantes y actores multilaterales, llenando los vacíos que ha dejado la retirada parcial de Estados Unidos. La ayuda exterior estadounidense debe adaptarse a este contexto multipolar, combinando diplomacia cultural y asistencia al desarrollo sostenida con una participación económica inteligente. Ello implica invertir en intercambios educativos, cooperación en energías verdes, infraestructura digital y emprendimiento local, en lugar de centrarse únicamente en aparatos militares o de seguridad. A través de un compromiso coherente y basado en valores, ajustado a las prioridades locales, Estados Unidos puede reafirmarse como un socio confiable dentro de un orden global cada vez más competitivo y fragmentado (Gause, 2017; Alkinani, 2020).

## **Conclusión**

Durante décadas, la ayuda exterior de Estados Unidos se ha presentado como una proyección de los valores estadounidenses: la promoción de la democracia, la estabilidad y el desarrollo. Sin embargo, como ha mostrado este artículo a través de diversos estudios de caso en América Latina y en la región de MENA, el despliegue estratégico de la ayuda ha servido con demasiada frecuencia como un mecanismo de apalancamiento geopolítico, más que como un vehículo de asociación genuina. Ya sea mediante respuestas a desastres securitizadas en Haití, programas ideológicamente condicionados en la República Dominicana o asistencia militar utilizada para consolidar regímenes autoritarios en Egipto y mantener ambigüedad estratégica en Irak, la ayuda estadounidense ha priorizado repetidamente la influencia inmediata sobre el cambio sostenible.

Enmarcados en las perspectivas del realismo neoclásico y la diplomacia económica, estos patrones revelan una contradicción más profunda: la política exterior estadounidense continúa oscilando entre aspiraciones normativas e imperativos transaccionales, mientras que su política de ayuda está moldeada tanto por las preferencias de élite y dinámicas internas como por consideraciones estratégicas globales. En los últimos años —especialmente durante el segundo mandato de Trump—,



esta contradicción se ha acentuado. El desmantelamiento de la USAID y la redefinición de la ayuda como herramienta de inversión antes que de desarrollo evidenciaron cómo las consideraciones económicas han desplazado progresivamente las prioridades humanitarias y de gobernanza, transformando la lógica de la asistencia de una cooperación constructiva a una negociación extractiva.

Tanto los casos de MENA como los de América Latina ilustran los costos de este enfoque: la erosión del poder blando estadounidense, el aumento del escepticismo en las sociedades civiles y el creciente atractivo de actores alternativos. En un mundo multipolar, donde los Estados poseen mayor agencia y capacidad de elección, el antiguo modelo de condicionalidad sin reciprocidad no solo ha dejado de ser eficaz, sino que se ha vuelto contraproducente. Si Estados Unidos aspira a restaurar su credibilidad y relevancia estratégica, debe recalibrar de manera profunda su modelo de ayuda exterior. El desarrollo debe entenderse no como caridad ni coerción, sino como una inversión sostenida en confianza, estabilidad y beneficio mutuo. Ello requiere reinstitucionalizar la capacidad civil de desarrollo, crear modelos híbridos de ayuda e inversión adaptativos y alinear las condicionalidades con indicadores sensibles al contexto. También implica reconciliar los objetivos estratégicos con los normativos, garantizando que la ayuda respalde tanto los intereses nacionales de Estados Unidos como las aspiraciones democráticas, económicas y sociales de sus socios.

La ayuda exterior sigue siendo uno de los pocos instrumentos de la política exterior estadounidense capaz de conjugar liderazgo ético con influencia pragmática. Pero, para lograrlo, debe ejercerse con consistencia, humildad y visión estratégica. Solo así podrá transformarse de un instrumento de presión en un pilar de asociación duradera dentro de un orden global en transformación.

## Referencias

- Adly, A. (2015). *The Triumph of the Bureaucracy: A Decade of Aborted Social and Political Change in Egypt*. Carnegie Endowment. <https://carnegieendowment.org/posts/2015/01/triumph-of-the-bureaucracy-a-decade-of-aborted-social-and-political-change-in-egypt?lang=en>
- Alkinani, Z. (2020). What does Biden's presidency mean for the future of the Gulf? openDemocracy. <https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/what-does-bidens-presidency-mean-for-the-future-of-the-gulf/>
- AlTaher, N. (6 de febrero de 2025). What does USAID do and why is it important in the Middle East? The National. <https://www.thenationalnews.com/news/mena/2025/02/06/what-does-usaid-do-and-why-is-it-important-in-the-middle-east/>
- Amnesty International. (2015). *Without Papers, I Am No One: Statelessness in the Dominican Republic*. <https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/2021/05/AMR2727552015ENGLISH.pdf>
- Atkins, G. P. y Wilson, L. A. (1998). *The Dominican Republic and the United States: From Imperialism to Transnationalism*. University of Georgia Press.
- Axelrod, M. C. (2011). *Aid as leverage? Understanding the U.S.-Egypt military relationship* [Tesis de maestría]. The Lauder Institute, University of Pennsylvania. <https://lauder.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2015/06/Axelrod.pdf>
- Babb, S. L. (2001). *Managing Mexico: Economists from Nationalism to Neoliberalism*. Princeton University Press.
- Baldwin, D. (1985). *Economic Statecraft*. Princeton University Press.
- Beschel Jr., R. P., Dyer, P. y Yousef, T. M. (2025). *USAID in MENA: A Requiem*. Middle East Council on Global Affairs. <https://mecouncil.org/publication/usaaid-in-mena-a-requiem/>
- Brownlee, J. (2012). *Democracy prevention: The politics of the U.S.-Egyptian alliance*. Cambridge University Press.
- Coto, D. y Sanon, E. (2025). *Haitians give cautious welcome to new international force approved by UN to tackle gangs*. WLRN. <https://www.wlrn.org/americas/2025-10-02/haitians-give-cautious-welcome-to-new-international-force-approved-by-un-to-tackle-gangs>
- Crandall, R. (2008). *Driven by Drugs: U.S. Policy Toward Colombia*. Lynne Rienner Publishers.
- Crandall, R. (2020). Colombia: The U.S.'s Loyal Ally in an Uncertain Region. *Journal of Inter-American Studies*, 62(2), 215-238.
- Drezner, D. W. (2003). The Hidden Hand of Economic Coercion. *International Organization*, 57(3), 643-659. <https://www.jstor.org/stable/3594840>
- Drezner, D. W. (2015). Targeted Sanctions in a World of Global Finance. *International Interactions*, 41(4), 755-764. <https://doi.org/10.1080/03050629.2015.1041297>

- Farrell, H. y Newman, A. L. (2019). *Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion*. *International Security*, 44(1), 42-79. [https://doi.org/10.1162/isec\\_a\\_00351](https://doi.org/10.1162/isec_a_00351)
- Financial Times. (2025). *Qatar orders up to 210 Boeing jets during Donald Trump's visit*. <https://www.ft.com/content/f14a9dfc-b9d6-44cd-8708-0d12c4d6f0e3>
- Fulton, J. (2020). *The GCC states and the shifting balance of global power* (pp. 113-129). En R. Diwan y M. Hertog (eds.), *The Gulf States and the International Balance of Power*. Springer.
- Gause, F. G. (2003). *The Approaching Turning Point: the future of U.S. Relations towards the Gulf*. Brookings Project on U.S. Policy Towards the Islamic World. <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/gause20030430.pdf>
- Goodwin, G. E. (14 de mayo de 2025). *Trump, Elon Musk, and top CEOs' lavish visit to Saudi Arabia in pictures*. Business Insider. <https://www.businessinsider.com/trump-elon-musk-top-ceos-visit-saudi-arabia-pictures-2025-5>
- Grandin, G. (2006). *Empire's Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism*. Metropolitan Books.
- Harrigan, J. y El-Said, H. (2009). *Aid and power in the Arab world: IMF and World Bank policy-based lending in the Middle East and North Africa*. Palgrave Macmillan.
- Hook, S. W. (1998). 'Building democracy' through foreign aid: The limitations of United States political conditionalities, 1992-96. *Democratization*, 5(3), 156-180. <https://doi.org/10.1080/13510349808403576>
- Isacson, A. (2017). *The U.S. and Colombia: A Case Study in Foreign Aid*. Washington Office on Latin America.
- Johnston, J. y Main, A. (2012). *Haiti: Where Did the Money Go?* Center for Economic and Policy Research.
- Katz, J. M. (2013). *The Big Truck That Went By: How the World Came to Save Haiti and Left Behind a Disaster*. Palgrave Macmillan.
- Lawson, M. y Tarnoff, C. (2016). *Foreign Aid: An Introduction to U.S. Programs and Policy*. Congressional Research Service. <http://nationalaglawcenter.org/wp-content/uploads/assets/crs/R40213.pdf>
- Lowenthal, A. F. (1991). *Exporting Democracy: The United States and Latin America*. Johns Hopkins University Press.
- O'Boyle, B. y Morland, S. (8 de junio de 2023). *US Vice President Harris to announce new embassies, spending for Caribbean on Trip*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/americas/us-vice-president-harris-announce-new-embassies-spending-caribbean-trip-2023-06-08/>
- O'Connor, T. (2025). *Iran offers to help Trump revive U.S. nuclear sector in canceled speech*. Newsweek. <https://www.newsweek.com/iran-offers-help-trump-revive-us-nuclear-sector-canceled-speech-2062297>
- Office of Inspector General. (30 de mayo de 2024). *Pre-Award Risk Management: USAID and IAF Missed Opportunities to Enhance Risk Management of Local Entities in Latin America and the Caribbean*. (Informe de auditoría No. 9-000-24-004-

- P). U.S. Agency for International Development. <https://oig.usaid.gov/sites/default/files/2024-06/Pre-Award%20Risk%20Management%20-%20USAID%20and%20IAF%20Missed%20Opportunities%20to%20Enhance%20Risk%20Management%20of%20Local%20Entities%20in%20Latin%20America%20and%20the%20Caribbean%20%289-000-24-004-P%2C%20%2099100222%29.pdf>
- Office of the Historian. (2025). *The Alliance for Progress, 1961–1969*. U.S. Department of State. <https://history.state.gov/milestones/1961-1968/alliance-for-progress>
- Pennacchio, K. (2025). Accusations of USAID Payments Fuel Harassment of Journalists in the Dominican Republic. *LatAM Journalism Review*. <https://latamjournalismreview.org/articles/accusations-of-usaid-payments-fuel-harassment-of-journalists-in-the-dominican-republic/>
- Rettberg, A. (2020). Peace-Making and the State in Colombia: Lessons from the 2016 Accord. *Latin American Politics and Society*, 62(3), 1-25.
- Robert F. Kennedy Human Rights. (2024). *Civil Society Organizations Express Concern about the Worsening Situation of Human Rights Defenders in the Dominican Republic*. <https://rfkhumanrights.org/our-voices/civil-society-organisations-express-concern-about-the-worsening-situation-of-human-rights-defenders-in-the-dominican-republic/>
- Rose, G. (1998). Neoclassical realism and theories of foreign policy. *World Politics*, 51(1), 144-172. <https://dx.doi.org/10.1017/s0043887100007814>.
- Ryan, C. R. (2018). *Jordan and the Arab uprisings: Regime survival and politics beyond the state*. Columbia University Press.
- Sharp, J. M. (2023). *Egypt: Background and U.S. Relations*. Congressional Research Service. [https://www.congress.gov/crs\\_external\\_products/RL/PDF/RL33003/RL33003.121.pdf](https://www.congress.gov/crs_external_products/RL/PDF/RL33003/RL33003.121.pdf)
- Sharp, J. M. (Coord.) (2020). *U.S. Foreign Assistance to the Middle East: Historical Background, Recent Trends*. Congressional Research Service. <https://sgp.fas.org/crs/mideast/R46344.pdf>
- Stepansky, J. (14 de mayo de 2025). Donald Trump updates: Qatar, US sign deals to boost defence and trade ties. *Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/5/14/donald-trump-live-president-to-lift-syria-sanctions-heads-to-qatar-next>
- Sullivan, P. L., Tessman, B. F. y Li, X. (2011). U.S. military aid and recipient state cooperation. *Foreign Policy Analysis*, 7(3), 275–294. <https://doi.org/10.1111/j.1743-8594.2011.00138.x>
- Ulrichsen, K. C. (2020). *Qatar and the Gulf crisis: A study in resilience*. Oxford University Press.
- Wedel, J. R. (2005). U.S. Foreign Aid and Foreign Policy: Building Strong Relationships by Doing It Right! *International Studies Perspectives*, 6(1), 35-50. <http://www.jstor.org/stable/44218351>
- Worker Rights Consortium. (2013) *Stealing from the Poor: Wage Theft in the Haitian Apparel Industry*. <https://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2016/02/WRC-Haiti-Minimum-Wage-Report-10-15-13-5.pdf>